

Señores

JUZGADO SEXTO (06°) ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA (C)

j06admfla@cendoj.ramajudicial.gov.co

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.
RADICADO: 11-001-33-43-059-2018-00136-00
DEMANDANTE: NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR.
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA-CAQUETÁ.
LLAMADO EN GARANTÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad actuando en mi calidad de apoderado especial de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA.**, sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT 860.524.654-6., sometida al control y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera, tal y como se evidencia en los certificados de existencia y representación legal que se adjuntan, donde consta el poder general a mi conferido, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, manifiesto comedidamente que procedo en primer lugar a **CONTESTAR LA DEMANDA** instaurada por la Nación-Ministerio del Interior, en contra del Municipio de San José del Fragua. En segundo lugar, a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por el Municipio de San José del Fragua, anunciando desde ahora que me opongo a la totalidad de las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

I. OPORTUNIDAD

Teniendo en cuenta que la notificación personal de la admisión del llamamiento en garantía se realizó por correo electrónico el 22 de mayo de 2024, me permito presentar la contestación en la oportunidad legal para hacerlo, conforme a las disposiciones de los artículos 198 y 199 de la Ley 1437 del 2011, teniendo en cuenta que ese último fue modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 del 2021. En ese orden de ideas, el término de 15 días establecido en el inciso segundo del artículo 225 del CPACA se computa una vez transcurridos previamente dos días hábiles siguientes al envío del mensaje; término que inició el 27 de mayo de 2024, por lo que me encuentro en término para presentar el presente escrito.

CAPÍTULO I
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL HECHO 3.1.: A la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C., no le consta de forma directa lo señalado por los demandantes, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas. En todo caso, no debe perderse de vista que la parte actora deberá acreditar su dicho en debida forma a través de los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para el efecto.

No obstante, luego de realizar una revisión de las documentales aportadas al expediente, se observó que, en efecto, el Ministerio del Interior y el Municipio de San José del Fragua suscribieron el convenio interadministrativo N°F212 de 2015, el cual fue suscrito el 07 de mayo de 2015 y del cual fueron realizadas dos modificaciones el 12 de noviembre de 2015 y el 12 de diciembre de ese mismo año.

AL HECHO 3.3.: A la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C., no le consta de forma directa lo señalado por los demandantes, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas. En todo caso, no debe perderse de vista que la parte actora deberá acreditar su dicho en debida forma a través de los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para el efecto.

Además, es importante destacar que de conformidad con la revisión de las documentales y aclarando al despacho que el informe suscrito por el Supervisor José Reinel Contreras Yaruro data del 10 de noviembre de 2017. No obstante, de la revisión del escrito de contestación del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, así como las pruebas documentales aportadas en el año 2019, dan cuenta del cumplimiento del convenio, por lo que tales apreciaciones no están llamadas a prosperar.

La fundamentación del informe con relación a los aspectos jurídicos, se enfocó en la ausencia de documentales, tales como: comprobantes de egresos, certificación de avances de ejecución, informe final de supervisión, informes mensuales, acuerdo del consejo, antecedentes entre otros, los cuales, fueron remitidos debidamente por la demandada el 22 de abril de 2019 como consta en el expediente:



Por ende, es claro que lo relacionado en el informe suscrito por el Supervisor José Reinel Contreras Yaruro, actualmente queda desvirtuado, dado que como se indicó anteriormente, posterior al informe, para el año 2019, fueron aportadas todas las documentales y soportes que se requerían y que en el año 2017 a través del informe en mención, se indicó estaban pendientes.

AL HECHO 3.4: Lo esgrimido en el acápite no es un hecho, sino que se trata de apreciaciones meramente subjetivas realizadas por la parte demandante sin soporte probatorio alguno, relacionadas con relación a los fundamentos por los cuales resultaba procedente a su juicio la declaración de incumplimiento del convenio interadministrativo N°F212 de 2015. Razón por la cual, deberá cumplirse la carga establecida en el artículo 167 del C.G.P., y de esta forma la demandante debe probar su dicho a través de los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Empero lo anterior, no existió ningún perjuicio derivado de ese hecho, por lo que se torna improcedente aplicar una cláusula penal cuando el convenio interadministrativo cumplió a cabalidad su finalidad, se exalta nuevamente, que el Municipio de San José del Fragua aportó el 22 de abril de 2019 una serie de documentales, las cuales fueron recibidas a satisfacción por el Ministerio, cumpliendo con cada uno de los ítems y ello conllevó a que se expidiera el oficio N°19-19689-SIN-4020. Sumado a la certificación expedida el 22 de julio de 2019 por el Subdirector de Infraestructura Germán Escobar Melo, en la cual se indicó cumplimiento total de las obligaciones por parte del Municipio con un saldo a reintegrar de \$0.00.

CAPÍTULO II

I. OPOSICIÓN FRENTE A LAS PRETENSIONES

FRENTE A LA PRETENSIÓN 2.1.: ME OPONGO a que se declare que el Municipio de San José del Fragua incumplió y/o cumplió de manera defectuosa el convenio interadministrativo N°F212 de 2015, como quiera que al interior del proceso se encuentra debidamente acreditado que: (i) El

Municipio remitió en el año 2019 toda la documentación necesaria para realizar la liquidación del convenio, (ii) Se acreditó a través de las documentales que se giró a favor del Tesoro Nacional los rendimientos financieros y los intereses derivados del convenio (iii) Se probó a través de las documentales que el convenio fue cumplido en un 100%, (iv) Se expidió por parte del Ministerio un certificado señalando el cumplimiento total del convenio y un saldo de \$0.00.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 2.2.: ME OPONGO a que se condene al Municipio de San José del Fragua a pagar la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (167.000.000) derivado de un supuesto incumplimiento, como quiera que se acreditó que el presente medio de control se formuló con ocasión a un informe del año 2017, en el que no se había aportado toda la documentación. No obstante para el año 2019, se probó el cumplimiento del convenio en un 100% con un saldo de cero pesos en favor de la entidad contratante.

Asimismo, dicha suma no puede basarse en la garantía derivada de la póliza N°630-47-994000006141, en tanto evidentemente no se materializó el riesgo asegurado y es evidente la inexistencia de incumplimiento en cabeza del Municipio de San José del Fragua.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 2.3.: ME OPONGO a que se condene al Municipio de San José del Fragua a pagar la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$83.500.000) derivado de la cláusula penal pecuniaria, ante la inexistencia de incumplimiento alguno, sumado a que no se surtió el debido proceso por parte de la entidad para declarar el supuesto incumplimiento y consecuentemente para condenar a pagar la cláusula penal, tal y como se acordó en el Convenio mediante la *“CLÁUSULA VIGÉSIMA-DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIÓN”*.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 2.4.: ME OPONGO a que se condene al Municipio de San José del Fragua a consignar en favor del Tesoro Nacional rendimientos financieros o intereses, toda vez que estos ya fueron cancelados el 05 de febrero de 2019 y el 08 de marzo de 2019. Por lo que desde ya debe negarse esta pretensión, en tanto en el hipotético evento de concederse, generaría un pago de lo no debido.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 2.5.: ME OPONGO a que se ordene la liquidación judicial del convenio, decretando los ajustes, revisiones, reconocimientos y reintegros económicos, toda vez que como se expuso previamente, dichos reembolsos ya fueron realizados por parte del Municipio de San José del Fragua, acreditando pleno cumplimiento del convenio y correcta utilización de los recursos.

FRENTE A LA PRETENSIÓN 2.6.: ME OPONGO a que se condene al pago de suma indexada y actualizada, comoquiera que ninguna de las pretensiones de la demanda tiene vocación de prosperidad en contra de la demandada.

FRENTE A LA PRETENSIÓN SÉPTIMA: ME OPONGO a que se condene al Municipio de San José del Fragua, al pago de suma alguna por concepto de condena en costas y agencia en derecho, comoquiera que ninguna de las pretensiones de la demanda tiene vocación de prosperidad en contra de la demandada, por lo que no existe razón alguna para que se imponga.

CAPÍTULO III

III. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA


1. EXCEPCIONES PLANTEADAS POR EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, ENTIDAD QUE LLAMÓ EN GARANTÍA A MI REPRESENTADA.

Coadyuvo las excepciones propuestas por el Municipio de San José del Fragua, sólo en cuanto las mismas no perjudiquen los intereses de mi representada y bajo ese mismo tenor, formulo las siguientes:

2. INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.

El Municipio de San José de la Fragua demostró mediante la documentación presentada, el cumplimiento total del convenio interadministrativo N°212 de 2015. Los documentos evidenciaron que el proyecto fue ejecutado al 100%, tanto en avance como en la utilización de los recursos, y que la obra fue entregada en su totalidad y a satisfacción. Esto refuta las afirmaciones del apoderado de la demandante, quien basó la demanda en un informe del supervisor José Reinel Contreras Yaruro suscrito el 10 de noviembre de 2017. Dicho informe no consideró que en 2019 el Municipio presentó toda la documentación que acreditaba la ejecución del convenio. Por esta razón, mediante el oficio N°19-19689-SIN-4020 del 11 de junio de 2019, se confirmó la conformidad con la revisión de los documentos para la liquidación judicial.

En tal sentido, es preciso traer a colación el oficio N°19-19689-SIN-4020 del 11 de junio de 2019, que indicó conformidad en todos los aspectos necesarios para la liquidación del convenio en comento:



El futuro
es de todos

Mininterior

Al responder cite este número:
OFI19-19689-SIN-4020

Bogotá D.C. martes, 11 de junio de 2019

Señor
ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde Municipal
Municipio de San José de Fragua-Caquetá
Carrera 4 N° 3-25 Palacio municipal
San José de Fragua- Caquetá

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL FRAGUA

RADICADO: 1223 FECHA: 25-6-2019

ASUNTO: _____

DEPENDENCIA: A ANEXOS: _____


ASUNTO: Resultado revisión documentós para liquidación Judicial Convenio F212 de 2015
Municipio de San José de Fragua Numero de radicado EXTMI 19-17610


Respetado señor alcalde:

En relación con los documentos que nos remitió anexo al oficio que fue radicado en el Ministerio con el código EXTMI 19-17610 con el propósito de documentar el proceso de liquidación del Convenio F-212 de 2015, el cual como es de su conocimiento se radicó en Sede Judicial y teniendo en cuenta que esta administración, tiene la directriz de acompañar a los Entes Territoriales en el mencionado proceso, en tal sentido nos permitimos darle a conocer las observaciones a los soportes aportados, frente a los establecidos como faltantes y/o con algún grado de incumplimiento en nuestro memorando el MEM18-44904-SIN-4020 del 28 de agosto de 2018 , el cual se emitió como base para fundamentar el proceso ya descrito de liquidación, de acuerdo al siguiente detalle:


BALANCE FINANCIERO

En relación con los aspectos financieros manifestamos que una vez revisados los documentos remitidos pudimos evidenciar que el municipio de San José de Fragua, hizo entrega de la totalidad de comprobantes de egresos donde se evidencia que se ejecutó la suma de \$735.000.000,00, y además la certificación de los rendimientos financieros, situación que modifica el balance financiero, el cual queda de la siguiente manera:

DOCUMENTO ENTREGADO O FALTANTE	OBSERVACIÓN																								
	<div>CUMPLE </div> <div>Los comprobantes de egreso aportados permiten evidenciar que los contratos se pagaron conforme a las obligaciones del Convenio a pesar que comprobante de egreso N° 442 cuyo valor en el balance es de \$ 77.829.053,00 y en el esto se debe a que el comprobante N° 442 lo pagaron con los recursos parte con recursos del convenio y parte con los recursos del municipio.</div>																								
1. Comprobantes de egresos de los diferentes pagos realizados a cada uno de los contratos realizados para la ejecución del convenio.	<table><tr><th>Comprobante de Egreso</th><th>Valor \$</th></tr><tr><td>Orden de pago 1001 pago consultoría E y D</td><td>\$12.000.000,00</td></tr><tr><td>Orden de pago 1002 pago interventoría de obra</td><td>\$9.221.280</td></tr><tr><td>Orden de Pago 988 contrato N° 28 consultoría de obra</td><td>\$180.586.603,00</td></tr><tr><td>Orden de Pago N° 58 del contrato de interventoría</td><td>\$ 3.000.000</td></tr><tr><td>Orden de pago 114 Pago parcial contrato de obra N°028</td><td>\$174.595.176,00</td></tr><tr><td>Orden de pago 147 Segundo y Tercer pago del contrato de interventoría</td><td>\$18.442.560,00</td></tr><tr><td>Orden de Pago 344 del contrato de obra N°028</td><td>\$119.567.134,00</td></tr><tr><td>Orden de pago 713 Pago parcial del contrato de obra N° 28</td><td>\$120.340.034,00</td></tr><tr><td>Orden de pago N°111 Sexto pago del contrato de obra publica</td><td>\$100.000.000,00</td></tr><tr><td>Orden de pago N° 442 Pago final contrato de obra</td><td>\$77.829.053,00</td></tr><tr><td>Orden de pago N° 400 Pago final contrato de interventoría</td><td>\$19.436.160,00</td></tr></table>	Comprobante de Egreso	Valor \$	Orden de pago 1001 pago consultoría E y D	\$12.000.000,00	Orden de pago 1002 pago interventoría de obra	\$9.221.280	Orden de Pago 988 contrato N° 28 consultoría de obra	\$180.586.603,00	Orden de Pago N° 58 del contrato de interventoría	\$ 3.000.000	Orden de pago 114 Pago parcial contrato de obra N°028	\$174.595.176,00	Orden de pago 147 Segundo y Tercer pago del contrato de interventoría	\$18.442.560,00	Orden de Pago 344 del contrato de obra N°028	\$119.567.134,00	Orden de pago 713 Pago parcial del contrato de obra N° 28	\$120.340.034,00	Orden de pago N°111 Sexto pago del contrato de obra publica	\$100.000.000,00	Orden de pago N° 442 Pago final contrato de obra	\$77.829.053,00	Orden de pago N° 400 Pago final contrato de interventoría	\$19.436.160,00
Comprobante de Egreso	Valor \$																								
Orden de pago 1001 pago consultoría E y D	\$12.000.000,00																								
Orden de pago 1002 pago interventoría de obra	\$9.221.280																								
Orden de Pago 988 contrato N° 28 consultoría de obra	\$180.586.603,00																								
Orden de Pago N° 58 del contrato de interventoría	\$ 3.000.000																								
Orden de pago 114 Pago parcial contrato de obra N°028	\$174.595.176,00																								
Orden de pago 147 Segundo y Tercer pago del contrato de interventoría	\$18.442.560,00																								
Orden de Pago 344 del contrato de obra N°028	\$119.567.134,00																								
Orden de pago 713 Pago parcial del contrato de obra N° 28	\$120.340.034,00																								
Orden de pago N°111 Sexto pago del contrato de obra publica	\$100.000.000,00																								
Orden de pago N° 442 Pago final contrato de obra	\$77.829.053,00																								
Orden de pago N° 400 Pago final contrato de interventoría	\$19.436.160,00																								


<p>2. Certificación de la entidad bancaria donde se abrió la cuenta para manejar los recursos del proyecto, en el cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros generados de los recursos aportados por el Ministerio del Interior desde la apertura de la cuenta hasta su cancelación.</p>	<p style="text-align: right;">CUMPLE </p> <p>El Municipio aportó la siguiente certificación Bancaria de Banco popular, con el siguiente detalle correspondiente a los rendimientos financieros generados:</p> <table border="1" data-bbox="784 521 1248 903"><thead><tr><th>Banco</th><th>Información</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tipo de Cuenta</td><td>Ahorro</td></tr><tr><td>No. de Cuenta</td><td>220-620-28051-1</td></tr><tr><td>Fecha apertura: Día - Mes - Año</td><td>05 de mayo de 2015</td></tr><tr><td>Fecha Cancelación: Día mes año</td><td>5 de febrero de 2019</td></tr><tr><td>Rendimientos generados dicho periodo</td><td>\$ 2.145.649,05</td></tr></tbody></table>	Banco	Información	Tipo de Cuenta	Ahorro	No. de Cuenta	220-620-28051-1	Fecha apertura: Día - Mes - Año	05 de mayo de 2015	Fecha Cancelación: Día mes año	5 de febrero de 2019	Rendimientos generados dicho periodo	\$ 2.145.649,05
Banco	Información												
Tipo de Cuenta	Ahorro												
No. de Cuenta	220-620-28051-1												
Fecha apertura: Día - Mes - Año	05 de mayo de 2015												
Fecha Cancelación: Día mes año	5 de febrero de 2019												
Rendimientos generados dicho periodo	\$ 2.145.649,05												


3. Copia de la consignación de la devolución de los rendimientos financieros generados, en las cuentas indicadas más adelante.

CUMPLE 

El Municipio aportó soporte de la transacción correspondiente a los rendimientos financieros generados, de acuerdo a lo siguiente detalle:

Tipo de devolución	Valor Total	Detalle Transacción	Observaciones
Recursos no Ejecutados	\$ 0		
Rendimientos Financieros Generados	\$2.146.143,26	Rendimientos financieros del año 2015 al 2019	Este fue certificado por el banco

DOCUMENTO ENTREGADO O FALTANTE	OBSERVACIÓN			
				popular el día 25-04-2019
	Valores consignados favor del Ministerio	\$110.508.83	N° de la consignación 448058	Banco Popular
	El municipio remitió una transferencia de Sebra debito en donde se transfirió a dirección del tesoro nacional por el valor de \$ 2.035.634,43 adicionalmente adjunto una consignación del Banco Popular N° 448058 con un valor de \$110.508,53.			
	Nota: las Transacciones están sujeta a verificación de la Subdirección Financiera, a través del Sistema SIIF – Nación.			
4. Informe final del supervisor del municipio	<div>CUMPLE </div> <p>El municipio presento el informe de supervisión del convenio F-212 de 2015 realizado por Andrés Mauricio Parra Rivera Secretario de Planeación e Infraestructura donde hace un resumen de la información general del convenio, el contrato de interventoría de estudios y diseños, contrato de estudios y diseños, contrato de interventoría de obra y el contrato de obra detallando los valores de cada contrato, los pagos realizados, las prórrogas, las adiciones suscritas.</p>			

5. Informes mensuales del Municipio, técnico, administrativo y financiero sobre el avance de obra del convenio, indicando los porcentajes de ejecución de acuerdo con el cronograma aprobado por la interventoría, con sus soportes respectivos, correspondientes al mes junio 2015 y enero a diciembre del 2016	CUMPLE 												
	<p>El Municipio aportó los informes mensuales firmados por Máximo Sandoval Supervisor y Arnulfo Parra Peña Alcalde Municipal</p> <table border="1"><thead><tr><th>Periodo al que corresponde</th></tr></thead><tbody><tr><td>Informe mensual N° 3 de periodo 01 de julio de 2015 y 31 de julio del 2015</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 10 entre 1 de febrero del 2016 y 29 de febrero del 2016</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 11 entre 01 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2016</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 12 entre 1 de abril del 2016 y 30 de abril de 2016</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 13 entre 1 de mayo de 2016 y 30 de mayo de 2016</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 14 entre 1 de junio y 30 de junio de 2016</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 15 entre 1 de julio y 31 de julio de 2016</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 16 entre 1 de agosto y 31 de agosto 2016</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 17 entre 1 de septiembre y 30 de septiembre de 2016</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 18 entre 1 de octubre y 31 de octubre de 2016</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 19 1 de noviembre de 2016 y 30 de noviembre de 2016</td></tr><tr><td>Informe mensual N° 20 1 de diciembre de 2016 y 10 de diciembre de 2016</td></tr></tbody></table> <p>Nota Se remilieron los informes mensuales del mes de junio del año 2015 y los informes mensuales del año 2016 entre enero y diciembre en total un número de 12 informes donde evidencian los informes mensuales de cada uno de los contratos, información general del proyecto estado de garantías y resumen de pagos</p>	Periodo al que corresponde	Informe mensual N° 3 de periodo 01 de julio de 2015 y 31 de julio del 2015	Informe mensual N° 10 entre 1 de febrero del 2016 y 29 de febrero del 2016	Informe mensual N° 11 entre 01 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2016	Informe mensual N° 12 entre 1 de abril del 2016 y 30 de abril de 2016	Informe mensual N° 13 entre 1 de mayo de 2016 y 30 de mayo de 2016	Informe mensual N° 14 entre 1 de junio y 30 de junio de 2016	Informe mensual N° 15 entre 1 de julio y 31 de julio de 2016	Informe mensual N° 16 entre 1 de agosto y 31 de agosto 2016	Informe mensual N° 17 entre 1 de septiembre y 30 de septiembre de 2016	Informe mensual N° 18 entre 1 de octubre y 31 de octubre de 2016	Informe mensual N° 19 1 de noviembre de 2016 y 30 de noviembre de 2016
Periodo al que corresponde													
Informe mensual N° 3 de periodo 01 de julio de 2015 y 31 de julio del 2015													
Informe mensual N° 10 entre 1 de febrero del 2016 y 29 de febrero del 2016													
Informe mensual N° 11 entre 01 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2016													
Informe mensual N° 12 entre 1 de abril del 2016 y 30 de abril de 2016													
Informe mensual N° 13 entre 1 de mayo de 2016 y 30 de mayo de 2016													
Informe mensual N° 14 entre 1 de junio y 30 de junio de 2016													
Informe mensual N° 15 entre 1 de julio y 31 de julio de 2016													
Informe mensual N° 16 entre 1 de agosto y 31 de agosto 2016													
Informe mensual N° 17 entre 1 de septiembre y 30 de septiembre de 2016													
Informe mensual N° 18 entre 1 de octubre y 31 de octubre de 2016													
Informe mensual N° 19 1 de noviembre de 2016 y 30 de noviembre de 2016													
Informe mensual N° 20 1 de diciembre de 2016 y 10 de diciembre de 2016													

6. Acuerdo del Concejo Municipal donde se le confieren facultades al alcalde para contratar y suscribir convenios. Este acuerdo debe estar vigente	CUMPLE ←
	El Municipio aportó el Acuerdo del Concejo No: 001 del 6 de febrero del 2019, en el cual el Artículo Primero, autoriza al alcalde de San

DOCUMENTO ENTREGADO O FALTANTE	OBSERVACIÓN								
y acompañarse de la constancia de aprobación.	José del Fragua Caquetá hasta el 31 de diciembre del 2019 para celebrar contratos y convenios que la administración requiera para el cumplimiento de sus fines y objetivos de conformidad a la constitución y la ley.								
7. Antecedentes judiciales, Disciplinarios y Fiscales del Representante Legal de la Entidad Territorial y del Municipio	CUMPLE ← <p>El Municipio remito los documentos que evidencian que el alcalde Arnulfo Parra Peña no tiene ningún antecedente, judicial, disciplinario y fiscal</p> <table><tr><th>Documento</th><th>Fecha de Expedición</th></tr><tr><td>Antecedentes judiciales</td><td>18 marzo de 2019</td></tr><tr><td>Antecedentes disciplinarios</td><td>18 de marzo 2019</td></tr><tr><td>Antecedentes fiscales</td><td>18 de marzo de 2019</td></tr></table>	Documento	Fecha de Expedición	Antecedentes judiciales	18 marzo de 2019	Antecedentes disciplinarios	18 de marzo 2019	Antecedentes fiscales	18 de marzo de 2019
Documento	Fecha de Expedición								
Antecedentes judiciales	18 marzo de 2019								
Antecedentes disciplinarios	18 de marzo 2019								
Antecedentes fiscales	18 de marzo de 2019								
8. Ampliación el término de vigencia del amparo de cumplimiento y calidad del servicio de la póliza que se constituyó en la compañía PREVISORA S.A. para garantizar el convenio interadministrativo.	CUMPLE ← <p>El Municipio aportó la ampliación de la póliza lo cual se remite la ampliación para estudio, revisión y aprobación de la Subdirección Contractual:</p> <table><tr><th>Numero Póliza</th><th>630-4799400006141</th></tr><tr><td>Amparos:</td><td>Cumplimiento Calidad y servicio</td></tr><tr><td>Plazo Inicial</td><td>07/05/2015</td></tr><tr><td>Plazo Final</td><td>30/11/2019</td></tr></table>	Numero Póliza	630-4799400006141	Amparos:	Cumplimiento Calidad y servicio	Plazo Inicial	07/05/2015	Plazo Final	30/11/2019
Numero Póliza	630-4799400006141								
Amparos:	Cumplimiento Calidad y servicio								
Plazo Inicial	07/05/2015								
Plazo Final	30/11/2019								

En virtud del oficio en mención, y del cual se evidencia a través de los apartes el cumplimiento por parte del Municipio de San José del Fragua, queda totalmente desvirtuado lo que había sido señalado en el año 2017 por el supervisor José Reinel Contreras Yaruro.

[illegible]

													
<h2 style="margin: 0;">REGISTRO DE OPERACION</h2>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> <p>SUC:466 FECHA:8/03/2019 HORA:10:48:54</p> <p>Pagador:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGO Nit:800095782</p> <p>Beneficiario:MINISTERIO DEL INTERIOR CC:830114475</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"># PAGO</td> <td style="width: 30%;">REFERENCIA</td> <td style="width: 20%;">TIPO PAGO</td> <td style="width: 20%;">TOTAL PAGO</td> </tr> <tr> <td>1744138216</td> <td></td> <td>Cheque</td> <td>110,508.83</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL:</td> <td>110,508.83</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 25%; text-align: right; padding-top: 20px;"> <p>Página 1 de 1</p> </div> </div>		# PAGO	REFERENCIA	TIPO PAGO	TOTAL PAGO	1744138216		Cheque	110,508.83			TOTAL:	110,508.83
# PAGO	REFERENCIA	TIPO PAGO	TOTAL PAGO										
1744138216		Cheque	110,508.83										
		TOTAL:	110,508.83										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 40%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y C.C. 1115471270</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 25%; text-align: right;"> <p>Huella</p> </div> </div>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>Cadenas s.a.</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>- CLIENTE -</p> </div> <div style="width: 25%; text-align: right;"> <p>1/2018 P.1153</p> </div> </div>													

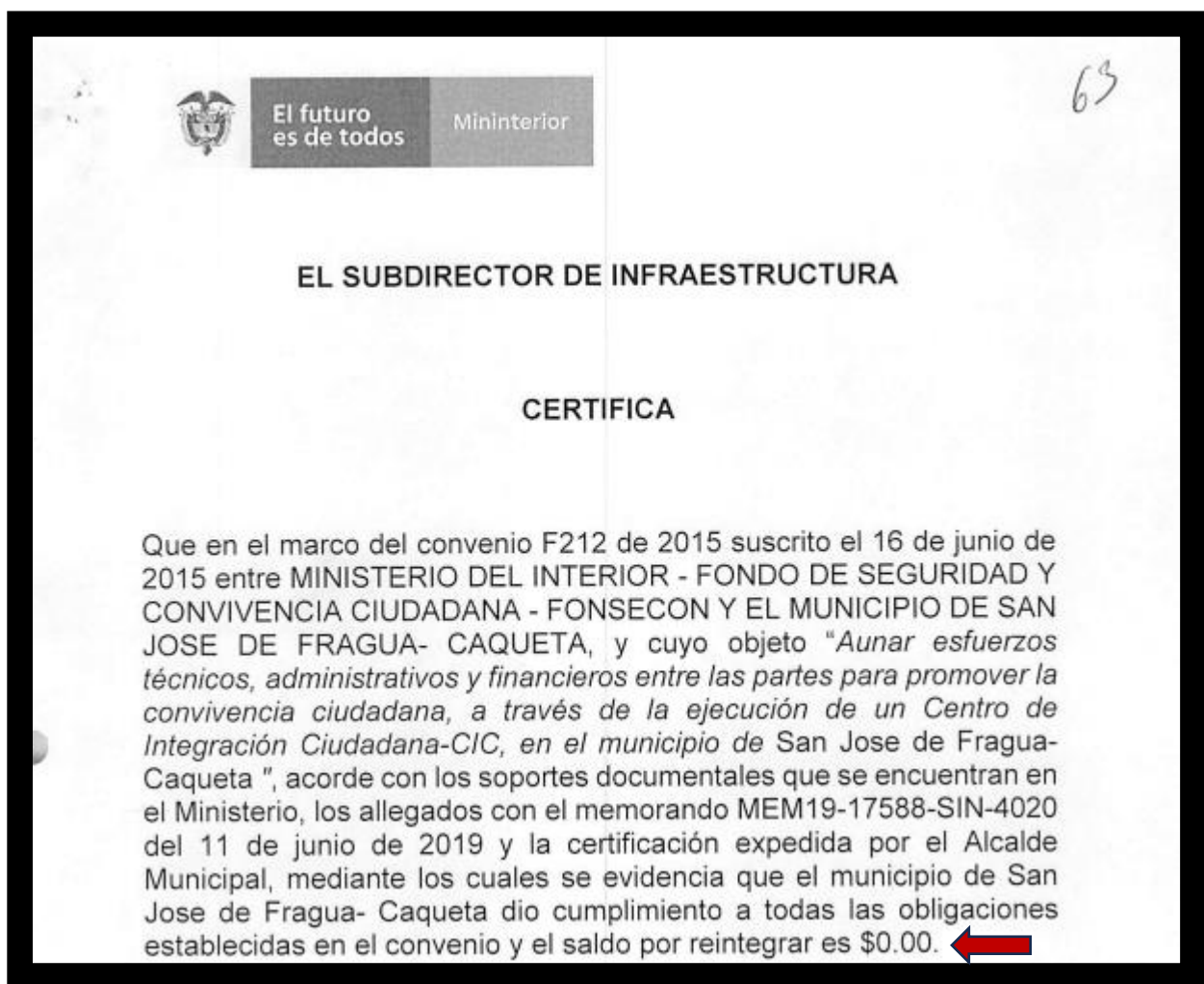
Al respecto, es preciso señalar que el presente medio de control no tiene vocación de prosperidad alguno, en tanto se enfocó en un documento suscrito en el año 2017, previo a que se remitiera toda la información documental y contractual que acreditan el cumplimiento en un 100 % del convenio interadministrativo.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado:

*“La demandante asimila la liquidación unilateral demandada a un acto de “declaratoria de incumplimiento” por cuanto considera que lo que en realidad entraña la decisión de no pagarle es el ejercicio de este poder **en atención a que las partes ya habían suscrito el***

acta de terminación de obra en la que quedó precisado que el contratista ejecutó sus obligaciones en un 100%; contrario a ese entendimiento la Sala verifica que la entidad (...) Para la Sala no hay prueba de incumplimiento atribuible a la contratante por el hecho de no pagar el valor de lo no ejecutado a satisfacción suya porque el pago final estaba sujeto a condición y esta no se cumplió; el contrato preveía en la cláusula "forma de pago" que el valor de las actas se pagaría de acuerdo con la obra ejecutada y "recibida a satisfacción del IDU" y el saldo final del 5% del valor total del contrato "previo recibo a satisfacción, suscripción del acta de liquidación y su correspondiente aprobación por parte del Director Técnico de Construcciones, así como la aprobación de los planos record y recibo a satisfacción de las obras por parte de la empresa de servicios públicos y entidades competentes" (fl. 189 cdno. 3). **Para demostrar el incumplimiento debía acreditarse que se cumplió la condición objetiva a la que estaba sujeto el pago final del contrato, como así no se hizo no puede afirmarse que se incumplió la forma de pago** (...). (Negrilla y cursiva fuera del texto original)¹

Por lo previamente expuesto, y en atención a la certificación del Subdirector del Infraestructura del 22 de julio de 2019, se advierte que no quedó ningún tipo de obligación pendiente:



¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección B, C.P. Dr. Fredy Ibarra Martínez, radicado: 25000-23-26-000-2007-00003-01(51508), 18 de noviembre de 2021.



En conclusión, las pretensiones de la demanda encaminadas al reconocimiento de sumas por supuesto incumplimiento del contrato, o cumplimiento defectuoso, resultan claramente improcedentes. La demanda se basó en un informe final de supervisión que no contaba con toda la documentación que acreditaba el cumplimiento del convenio al 100% y el correcto manejo de los recursos. En 2019, el Municipio de San José de la Fragua presentó toda la documentación necesaria, la cual fue aceptada sin objeciones, y se emitió una certificación indicando el cumplimiento total y un saldo pendiente de 0 pesos. Por lo tanto, el medio de control de controversias contractuales no es procedente en este caso, dado que la entidad demandada cumplió plenamente con sus obligaciones contractuales.

3. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL

En el Convenio N° F 212 de 2015 suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San José del Fragua se estableció en la CLÁUSULA VIGÉSIMA-DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES, que en caso de incumplimiento por parte del Municipio de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el convenio, habilitaba al Ministerio para declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso. Además, dicha cláusula estableció que, en caso de que el supervisor por parte del Ministerio advirtiera un presunto incumplimiento, se acudiría al procedimiento previsto en el manual de contratación del Ministerio del Interior y fondos a su cargo.

No obstante, lo anterior, en el presente caso, el Ministerio procedió a demandar al Municipio a través del medio de control de Controversias Contractuales por un presunto incumplimiento del Convenio, sin haber seguido el procedimiento contractual estipulado en la CLÁUSULA VIGÉSIMA, ni haber otorgado al Municipio la oportunidad de defenderse en la etapa previa al proceso judicial. Esto constituye un claro incumplimiento del procedimiento establecido en el contrato, lo que vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa y la contradicción.

Al respecto, el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, garantiza que ninguna persona puede ser juzgada sin la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En este caso, el debido proceso implica que el Ministerio debió haber seguido el procedimiento contractual acordado antes de declarar el incumplimiento y proceder judicialmente.

El derecho a la defensa y la contradicción, también protegido por el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, asegura que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un término razonable y por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, lo que demuestra que el Ministerio no otorgó al Municipio la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas en la etapa previa, vulnerando así su derecho fundamental a la defensa y contradicción.

Adicionalmente, el concepto del Consejo de Estado establece que en los convenios interadministrativos puros u originales no es procedente que la Administración imponga multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de manera unilateral. Solamente en los casos de convenios interadministrativos que impliquen una remuneración, es decir, aquellos que tengan obligaciones de contenido patrimonial, se aplicarán las mismas reglas que a los contratos interadministrativos. El Consejo de Estado aclara que no importa cómo las entidades estatales denominen sus acuerdos, sino los elementos esenciales de estos los que determinan su nominación y los efectos jurídicos que les corresponden según la legislación. Finalmente, en los convenios interadministrativos, si se han pactado multas o cláusulas penales, la declaración de incumplimiento o la imposición de estas corresponderá al juez del convenio, y si se ha pactado una póliza de cumplimiento como garantía, se deberá realizar la correspondiente reclamación a la aseguradora conforme a las normas del derecho común.

Por lo anterior, es preciso traer a colación lo establecido por la Sala de Consulta y Servicio Civil²:

"En consecuencia, en los convenios interadministrativos puros u originales no es procedente ejercer la competencia unilateral de la Administración para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Exceptúese el caso de los "convenios interadministrativos" que comporten el pago de una remuneración, es decir, que su objeto tenga obligaciones de contenido patrimonial, los cuales se someterán al

² Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación interna: 2257 Número Único: 11001-03-06-000-2015-00102-00

mismo régimen de los contratos interadministrativos, conforme a lo ya analizado, pues no interesa cómo las entidades estatales partes denominen sus negocios jurídicos y acuerdos dado que son los elementos esenciales de estos los que permiten no solo nominarlos sino tipificarlos y darles los efectos jurídicos que le correspondan según la legislación"

(...) Finalmente, en el evento en que se hayan pactado multas o cláusulas penales en los convenios interadministrativos propiamente dichos, la declaratoria de incumplimiento o la imposición de las multas o cláusulas penales así como su ejecución, corresponderá al juez del convenio y, si se ha pactado como garantía una póliza de cumplimiento, deberá realizarse la correspondiente reclamación a la aseguradora siguiendo para el efecto las normas del derecho común."

Sumado a lo anterior, en atención a los principios de transparencia, responsabilidad y precaución, es fundamental el deber especial de supervisar de forma permanente la ejecución del convenio. Esto se refleja en la necesidad de actuar a través de un supervisor o interventor del convenio, según el caso. Asimismo, para proteger el interés general al que las entidades partícipes del convenio contribuyen desde su ámbito funcional, puede pactarse la terminación anticipada del negocio jurídico, ya sea por mutuo disenso o a través de condiciones resolutorias expresas por incumplimiento.

De otra parte, es preciso señalar que los convenios interadministrativos se someten a los principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado, tales como transparencia, planeación y buena fe, entre otros. Estos principios se extienden también a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, tales como moralidad, economía y celeridad. Todo esto se debe al carácter vinculante de estos convenios, los cuales se celebran y ejecutan en un plano de igualdad o equivalencia, lo que significa ausencia de prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra. Dada la naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos, las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, no se aplican automáticamente a dichos convenios, ya que este estatuto regula esencialmente relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso. Por lo tanto, en cada caso concreto debe analizarse si la disposición correspondiente del Estatuto Contractual es aplicable, de acuerdo con la naturaleza jurídica, objeto y finalidad del convenio.

En línea con lo anterior, el Consejo de Estado³, estableció lo siguiente:

"De otra parte, es preciso señalar que los convenios interadministrativos se someten a los principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado (transparencia,

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 23 de junio de 2010, Exp. 1998-00261.

planeación, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 CP (moralidad, economía, celeridad, entre otros)⁵², en virtud del carácter vinculante de los mismos, dentro del contexto de un ánimo de cooperación que se refleja en el plano de igualdad o equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa ausencia de prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra.

Ahora, dada la naturaleza jurídica explicada de los convenios interadministrativos, las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenidas en la actualidad en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de aplicación automática a tales convenios, toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente regula son relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso⁵³. En tal sentido, en cada caso concreto deberá analizarse, de conformidad con la naturaleza jurídica, objeto y finalidad que se pretende cumplir o desarrollar con el respectivo convenio, si la disposición correspondiente del Estatuto Contractual es aplicable o no”.

En el caso que nos ocupa, el convenio interadministrativo entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San José del Fragua debe ser analizado bajo estos principios. La actuación del Ministerio, al no haber seguido el debido proceso establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA y al haber iniciado directamente un proceso judicial sin otorgar al Municipio la oportunidad de defenderse, contraviene los principios de transparencia, planeación y buena fe. Además, esta acción afecta los principios de moralidad, economía y celeridad de la función administrativa, ya que no se respetó la etapa previa que garantizaba un trato equitativo y justo entre las partes.

El principio de igualdad o equivalencia en la celebración y ejecución de estos convenios implica que ninguna de las partes puede tener prerrogativas sobre la otra. Sin embargo, al proceder unilateralmente sin cumplir con el debido proceso, el Ministerio está ejerciendo una prerrogativa indebida sobre el Municipio, lo cual es incompatible con la naturaleza colaborativa y equilibrada de los convenios interadministrativos.

Finalmente, dado que los convenios interadministrativos no se rigen automáticamente por las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es necesario examinar si las reglas de dicho estatuto son aplicables en este caso particular. En este contexto, es claro que las acciones del Ministerio deben alinearse con los principios específicos que rigen los convenios interadministrativos y no con las normas generales aplicables a los contratos de contenido patrimonial y oneroso.

En conclusión, la actuación del Ministerio al no cumplir con el procedimiento contractual y los principios legales y constitucionales aplicables vulneró los derechos del Municipio de San José del Fragua al debido proceso, la defensa y la contradicción. Por lo tanto, se solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que se declare la excepción de incompetencia por falta de cumplimiento de la etapa previa y se ordene al Ministerio seguir el procedimiento contractual establecido antes de proceder judicialmente.

4. LA OBLIGACIÓN NO ES CLARA EXPRESA NI EXIGIBLE.

Las pretensiones de la demanda encaminadas al reconocimiento de sumas por supuesto incumplimiento del contrato, o cumplimiento defectuoso, son improcedentes, ya que no existe una obligación clara, expresa ni exigible. La documentación presentada por el Municipio de San José del Fragua en 2019 demostró el cumplimiento total del convenio interadministrativo N°212 de 2015, así como el correcto manejo de los recursos. Esta documentación fue aceptada sin objeciones y resultó en la emisión de una certificación que indicaba un saldo pendiente de 0 pesos. Por lo tanto, los montos reclamados por la demandante carecen de fundamento jurídico o probatorio.

En atención a lo anterior, es evidente la ausencia de una obligación actualmente expresa, clara y exigible que surta efectos obligacionales frente al Municipio de San José del Fragua o de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, en atención a que las sumas pretendidas, se basaron en el informe final de supervisión de 2017, utilizado como base para la demanda, el cual no consideraba toda la documentación completa que soportaba el cumplimiento del convenio al 100%. La aceptación de la documentación adicional presentada en 2019 y la certificación del cumplimiento total refutan cualquier alegato de incumplimiento o manejo defectuoso de los recursos. En este contexto, el medio de control de controversias contractuales no es procedente, ya que se ha demostrado que la entidad demandada cumplió plenamente con sus obligaciones contractuales.

En palabras del Consejo de Estado, para que las obligaciones puedan ser susceptibles de ejecución requieren cumplir requisitos de forma y fondo, respecto del fondo el Máximo Tribunal refiere que:

“Una obligación es (i) expresa cuando está determinada en el mismo título, de forma nítida, sin que sea necesario acudir a lucubraciones, suposiciones o razonamientos lógicos jurídicos para determinarla. En este punto, no se puede soslayar que el título ejecutivo puede emanar de una confesión ficta o tácita, en razón de lo normado en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil; (ii) es clara cuando está determinada de forma fácil e inteligible en el documento o documentos y en sólo un sentido y (iii) exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se manifiesta en la que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido o cuando ocurriera una condición ya acontecida o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, previo requerimiento.”⁴

Además de la innegable importancia de los requisitos que componen el título ejecutivo, el Honorable Consejo de Estado examina la efectividad del título en los siguientes términos:

“específicamente respecto del cobro ejecutivo de las pólizas de seguro tomadas por los

⁴ C.E., Secc. Tercera, Sent. 2000-01184, may. 29/2014. M.P. Conto Díaz del Castillo Stella.

contratistas de la Administración para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, es decir, en aquellos eventos en los que la Administración reclama judicialmente el pago de la indemnización contenida en esa póliza de seguro, se observa que ésta, constituye apenas, uno de los componentes del título ejecutivo complejo que en estos eventos de cobro ejecutivo de obligaciones contractuales a favor de la Administración, se debe conformar, y que comprende, no sólo la respectiva póliza -en la que consta el traslado del riesgo que el contratista de la Administración le hizo a la aseguradora, respecto de su deber de indemnizar a la entidad estatal por los perjuicios surgidos de su incumplimiento contractual-, sino también, el contrato estatal y el acto administrativo mediante el cual se declaró la existencia del siniestro.

La obligación es expresa porque se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer. Es clara cuando sus elementos están determinados o pueden inferirse de una simple revisión del título ejecutivo y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de esta porno estar pendiente de un plazo condición”.

En conclusión, las pretensiones de la demanda encaminadas al reconocimiento de sumas por supuesto incumplimiento del contrato, o cumplimiento defectuoso, son improcedentes, ya que no existe título ejecutivo alguno que las respalde. Según el Consejo de Estado, para que una obligación sea susceptible de ejecución, debe cumplir con requisitos de forma y fondo. En términos de fondo, la obligación debe ser expresa, clara y exigible. En este caso, la obligación no es expresa, ya que no está determinada en el título de manera nítida y sin necesidad de interpretaciones adicionales. Tampoco es clara, pues no se encuentra de forma fácil e inteligible en el documento o documentos, ni es exigible, porque no puede demandarse su cumplimiento debido a que no se ha acreditado una condición necesaria.

La documentación presentada por el Municipio de San José del Fragua en 2019 demostró el cumplimiento total del convenio interadministrativo N°212 de 2015. Por lo tanto, los montos reclamados por la demandante carecen de fundamento jurídico o probatorio. Además, el Consejo de Estado establece que, para que un título ejecutivo sea efectivo, debe estar compuesto por la obligación clara y específica, que en este caso no existe, pues no hay acto administrativo que declare un siniestro ni contrato estatal que lo respalde.

5. LA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDANTE CONLLEVARÍAN A QUE SE CONFIGURE EL PAGO DE LO NO DEBIDO:

Es importante resaltar que, como se acreditó previamente, a la fecha no existe ninguna obligación en cabeza del Municipio de San José del Fragua, ya que se soportó debidamente en un 100% la ejecución del convenio interadministrativo N° 212 de 2015. Asimismo, se realizó el respectivo giro de los rendimientos financieros e intereses, lo que conllevó a la expedición de la certificación del 22

de julio de 2019 por parte del subdirector de infraestructura, en la que se consignó el cumplimiento del convenio y un saldo pendiente por reintegro de \$0.00.

Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el pago es el medio usual para extinguir las obligaciones cuando se cumple efectivamente con lo debido. Sin embargo, si una obligación que se pretende pagar no existe, cualquier pago realizado se considera indebido. En este caso, dado que el Municipio de San José del Fragua ya ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales y esto ha sido certificado oficialmente, cualquier condena adicional que implique un pago por parte del Municipio sería un pago de lo no debido. Esto se debe a que no hay ninguna obligación pendiente que justifique tal pago.

Además, cuando se trata de obligaciones contractuales, cualquier nulidad de dichas obligaciones debe ser declarada por un juez. La administración no tiene la facultad de declarar unilateralmente la nulidad de un contrato. Por lo tanto, sin una declaración judicial de nulidad, no puede existir una obligación exigible que justifique un pago adicional. En este contexto, cualquier intento de exigir pagos adicionales al Municipio, basados en supuestos incumplimientos ya desvirtuados, carece de fundamento jurídico y resultaría en un pago de lo no debido. Esto refuerza aún más la improcedencia de las pretensiones de la demanda.

Al respecto el Consejo de Estado⁵ indicó lo siguiente:

“Se produce un pago de lo no debido cuando la obligación que se debe es inexistente, ya que éste es simplemente un medio para extinguir las obligaciones”⁶.

Ahora bien, tratándose de una obligación contractual, la nulidad absoluta o relativa debe ser declarada por un juez, conforme a lo establecido en el Código Civil⁷ y la Ley 80 de 1993⁸. La nulidad no opera de pleno Derecho, ni se contempla dentro de las facultades excepcionales de la administración, por lo que no puede ser declarada unilateralmente por ésta.

En este orden de ideas, el pago de lo no debido, en virtud de una obligación contractual, requiere la declaración previa de la nulidad absoluta o relativa del acto jurídico que constituya la fuente de la obligación de pago del canon superfiario.

En conclusión, y al no existir obligación alguna en cabeza del Municipio de San José del Fragua, resulta no solo improcedente el presente medio de control, sino también cualquier solicitud de pago o condena contra el Municipio, ya que al no existir ningún reintegro pendiente, cualquier suma conllevaría a un pago de lo no debido. La certificación emitida en julio de 2019 por el subdirector de infraestructura confirma que el convenio interadministrativo N° 212 de 2015 fue ejecutado y liquidado correctamente, sin saldos pendientes. Este hecho demuestra que el Municipio cumplió cabalmente con sus obligaciones contractuales.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera, Subsección C, MP. Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas, 25000-23-26-000-2006-00657-01(40992), 28 de octubre de 2019.

Además, conforme a la jurisprudencia, el pago de lo no debido se configura cuando se realiza un desembolso sin una obligación existente que lo respalde. En este caso, cualquier pago adicional exigido al Municipio no solo carece de sustento jurídico, sino que también contraviene los principios de equidad y legalidad, pues se estaría obligando al Municipio a asumir una carga económica injustificada. La inexistencia de un título ejecutivo válido y la ausencia de un acto administrativo que declare un incumplimiento reafirman que no hay base legal para tal exigencia. Por lo tanto, se debe desestimar cualquier intento de cobro adicional, ya que estaría fundamentado en premisas erróneas y sin respaldo jurídico.

6. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito al señor Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo del extremo pasivo de la *litis* y que pueda configurar otra causal que la exima de toda obligación indemnizatoria.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

CAPÍTULO IV.

CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

AL HECHO “1”: No es un hecho que sirva de base al llamamiento en garantía que nos ocupa.

AL HECHO “2”: Es cierto, claro, en virtud del convenio interadministrativo de cofinanciación N°212 de 2015, se suscribió el contrato de seguro materializado en la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales N°630-47-994000006141, la cual tuvo por amparo: *“EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIOINTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N.212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FOSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) NO. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”, siendo asegurado y beneficiario La Nación-Ministerio del Interior Fondo Nacional Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON.*

AL HECHO “3”: Es cierto, aclaro: la póliza anteriormente señalada tuvo 12 anexos, teniendo como vigencia respecto del amparo del cumplimiento desde el 07 de mayo de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2019, extremo temporal final única y exclusivamente para la liquidación del convenio según lo expuesto por la entidad en comunicación OFI19-5567-SIN-4020 DE FECHA 28/02/2019.

AL HECHO “4”: Lo esgrimido en el acápite no es un hecho, sino que se trata de apreciaciones meramente subjetivas realizadas por el apoderado de la demandada con relación a la vinculación de mí representada. Razón por la cual, deberá cumplirse la carga establecida en el artículo 167 del C.G.P., y de esta forma la demandante debe probar su dicho a través de los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

Asimismo, se aclara que, en consonancia con los argumentos previamente expuestos, es evidente que no se ha materializado el riesgo asegurado en la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales N°630-47-994000006141, en tanto es inexistente el supuesto incumplimiento del contrato interadministrativo N°212 de 2015, por tal razón no ha nacido obligación condicional en cabeza de la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.

CAPÍTULO V

I. A LAS PRETENSIONES TÁCITAS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Al momento de resolver lo concerniente a la relación sustancial que sirve de base a la convocatoria que se hizo a mi procurada, la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, como llamada en garantía por parte del Municipio de San José del Fragua, ruego tener en cuenta, pese a la ausencia de responsabilidad de dicha entidad y de mi procurada en torno a los hechos en que se basa la demanda, que en el remoto caso que prosperaren una o algunas de las pretensiones del libelo de la parte actora, en gracia de discusión y sin que esta observación constituya aceptación de responsabilidad alguna, mi representada se opone a la prosperidad de las pretensiones del llamamiento en garantía en la medida que excedan los límites y coberturas acordadas, y/o desconozcan las condiciones particulares y generales de la póliza y las disposiciones que rigen el contrato de seguro, así como también, si exceden el ámbito amparado otorgado o no se demuestra la realización del riesgo asegurado o se comprueba una causa de exclusión.

Sumado a lo anterior, como se expuso anteriormente, no ha nacido la obligación condicional en cabeza de mí representada, por cuanto no se materializaron los riesgos asegurados.

CAPÍTULO VI

I. EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. INEXIBILIDAD DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES N°630-47-994000006141.

Debe decirse que no existe obligación indemnizatoria a cargo de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., respecto de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales N°630-47-994000006141. Por cuanto no se ha realizado el riesgo asegurado y amparado, esto es, no se acreditó ningún tipo de incumplimiento o cumplimiento defectuoso como lo indicó el apoderado de la demandante, contrario sensu, se acreditó el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la respectiva entrega de soportes documentales que así lo acreditan, tanto así, que mediante oficio N°19-19689-SIN-4020 del 11 de junio de 2019 expedido por el Ministerio, se indicó que se cumplieran con la totalidad de exigencias para proceder con la respectiva liquidación sin controversias. Lo anterior en concordancia con las condiciones generales y particulares de las pólizas en cuestión, que menciona como amparo principal:

“EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N.212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FOSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) NO. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”

En consonancia con lo anterior el artículo 1072 del Código de Comercio define como siniestro:

“ARTÍCULO 1072. DEFINICIÓN DE SINIESTRO. *Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado”.*

Así las cosas, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional en cabeza de mi mandante, puesto que no hubo incumplimiento total o parcial atribuible al Municipio de San José del Fragua. Toda vez que como se ha desarrollado a lo largo del presente escrito, se cumplió con el objeto contractual, tanto así que el Municipio radicó ante el Ministerio del Interior en el año 2019, toda la documentación necesaria para proceder con la liquidación sin controversias, documentación que de acuerdo con el Ministerio cumplió con todos y cada uno de los requisitos. En consecuencia, no existe realización de riesgo asegurado en el presente asunto en tanto que no hubo incumplimiento alguno, incluso fueron aportadas documentales que contienen los soportes fotográficos, un informe financiero, soportes de devoluciones de rendimientos financieros, informe final de supervisión, comprobantes de pagos, certificados de retención en la fuente, entre otros que acreditan

cumplimiento total.

En conclusión, dado el cumplimiento en cabeza del Municipio de San José del Fragua, no ha surgido la obligación condicional del asegurador, en la medida que no se ha realizado el riesgo asegurado. Por todo lo anterior, no demostrado el supuesto incumplimiento en cabeza del Municipio, no podrá en ninguna circunstancia afectarse la póliza identificada con el N°630-47-994000006141, por ende, tampoco surgir obligación alguna a cargo de mi prohijada.

2. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES N°630-47-994000006141.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro”⁹

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los contratos de seguro. Razón por la cual, es menester señalar que la Póliza De Garantía Única de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales N°630-47-994000006141, en su Sección Segunda señala una serie de exclusiones, las cuales presento a continuación:

“EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B., Mayo 27 de 2020.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.

2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO”.

Así las cosas, bajo la anterior premisa, en caso de configurarse alguna de las exclusiones arriba señaladas o las que constan en las condiciones generales y particulares de la póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales N°630-47-994000006141, estas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la jurisprudencia. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza de la aseguradora como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

3. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte del Municipio de San José del Fragua, implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo una indemnización por parte del Municipio que en ninguna medida incumplió el convenio interadministrativo N°212 de 2015, contrario sensu, a través del oficio N°19-19689-SIN-4020 del 11 de junio de 2019 el Ministerio acreditó el cumplimiento de los requisitos para proceder con liquidación sin controversias.

Conforme a ello, es preciso resaltar que la demanda se fundamentó en el certificado final de supervisión del 10 de noviembre de 2017 suscrito por el supervisor del convenio N°F212 de 2015, José Reinel Contreras Yaruro, no obstante, desconocía el oficio póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales N°630-47-994000006141, mediante el cual, el Ministerio señaló que los documentos aportados por el Municipio de San José del Fragua, cumplían con las exigencias para la liquidación del convenio sin controversias.

En conclusión, no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la actora.

4. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA N°630-47-994000006141.

En el remoto e improbable evento en que el despacho considere que sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, en virtud de la póliza vinculada. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la

suma asegurada:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. *El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.*

La norma antes expuesta es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”¹⁰
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza, así:

Para la Póliza. N°630-47-994000006141.:

AMPAROS					
GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO					
DESCRIPCION	AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO					
	CUMPLIMIENTO		07/05/2015	30/11/2019	167,000,000.00
	CALIDAD DEL SERVICIO		07/05/2015	30/11/2019	167,000,000.00
BENEFICIARIOS					
NIT 830114475 - LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON					
BENEFICIARIOS					
NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:					

Documento: Contrato de seguro Póliza N°630-47-994000006141.

¹⁰ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 5952. Diciembre 14 de 2001.

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al honorable despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, no puede ser condenada por un mayor valor que el expresamente establecido en la póliza antes referida. En todo caso, dichas pólizas contienen unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

5. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MI MANDANTE Y LOS DEMAS DEMANDADOS – INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SEGURO.

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Es importante recabar sobre el particular por cuanto a que la obligación de mí representada ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., tiene su génesis en un contrato de seguro celebrado dentro de unos parámetros y límites propios de la autonomía de la voluntad privada y no de la existencia de responsabilidad civil extracontractual propia de la aseguradora, sino de la que se pudiere atribuir al asegurado conforme lo establecido por el artículo 2341 del Código Civil, por tanto se encuentra frente a dos responsabilidades diferentes a saber: 1. La del asegurado por la responsabilidad civil extracontractual que se le llegará a atribuir, cuya fuente de obligación indemnizatoria emana de la ley propia y 2. La de mí representada aseguradora cuyas obligaciones no emanan de la ley propiamente dicha, sino de la existencia de un contrato de seguro celebrado dentro de los parámetros dados por los artículos 1036 del Código de Comercio y S.S., encontrándose las obligaciones de mí representada debidamente delimitadas por las condiciones pactadas en el contrato de seguro celebrado, constituyéndose entonces las obligaciones del asegurado y de la aseguradora en obligaciones independientes y que no son solidarias.

La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y mediante ponencia del Dr. Ariel Salazar Ramírez en sentencia SC20950-2017 Radicación N° 05001-31-03-005-2008- 00497-01 ha indicado que:

*“(…) Por último, **la compañía aseguradora no está llamada a responder de forma solidaria por la condena impuesta, sino atendiendo que «el deber de indemnizar se deriva de una relación contractual**, que favoreció la acción directa por parte del demandante en los términos del artículo 1134 del C. de Co (…)” (Subrayas y negrilla mías)*

Entendido lo anterior, es preciso indicar que la solidaridad de las obligaciones en Colombia solo se

origina por pacto que expresamente la convenga entre los contrayentes, lo anterior según el art. 1568 del Código Civil Colombiano que reza:

“(…) En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley. (…)

En virtud de tal independencia en las obligaciones, se formula esta excepción por cuanto el artículo 1044 del Código de Comercio faculta a la aseguradora proponer al tercero beneficiario las excepciones y exclusiones que pudiere interponerle al asegurado o tomador del contrato de seguro, motivo por el cual puede alegar mí representada la ausencia de cobertura ante la falta de prueba de la ocurrencia y cuantía del siniestro y las exclusiones y demás condiciones que resultaren atribuibles al presente evento.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

6. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

CAPÍTULO VII

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

1. DOCUMENTALES

- Copia de la póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales N°630-47-994000006141, con su respectivo condicionado particular y general.

2. TESTIMONIALES

- Solicito se sirva citar al Dr. **JAVIER ANDRÉS ACOSTA CEBALLOS**, mayor de edad, quien ostenta la calidad de asesor externo de la compañía y quien podrá dar cuenta al despacho sobre el riesgo asumido por la compañía aseguradora que represento, amparos, coberturas, pagos efectuados con cargo a la póliza y demás situaciones expuestas en este escrito.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al despacho sobre las condiciones particulares y generales de la póliza, y en general, sobre las excepciones propuestas frente a la imputación. Podrá ser citado en la calle 69 N°4-48 oficina 502 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico jacosta@gha.com.co

3. OPOSICIÓN FRENTE A LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA:

Sea lo primero poner de presente, la improcedencia del decreto de prueba solicitado por el extremo actor en el acápite “5. PRUEBAS-5.2.1.”, como quiera que el apoderado de la demandante se limita a peticionar que se exija al Municipio demandado que se aporte con la contestación documentales que obren en el expediente, sin reunir los presupuestos procesales establecido en el artículo 173 del Código General del Proceso.

“ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

*En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. **El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.***

Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En consonancia con la disposición antes referida, el juzgado deberá abstenerse de decretar pruebas

que la parte demandante hubiera podido obtener directamente o por medio de derecho de petición. Presupuesto que en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado, como quiera que la demandante se limitan a incorporar el acápite “5. PRUEBAS-5.2.1.”, sin allegar prueba si quiera sumaria de que elevaron petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitara la remisión de los documentos solicitados.

4. CONTRADICCIÓN PRUEBA POR INFORME APORTADA POR LA PARTE ACTORA.

Solicito respetuosamente al señor Juez que se ordene la comparecencia del Supervisor del Convenio N°F212 de 2015, José Reinel Contreras Yaruro, quien suscribió el informe final del 10 de noviembre de 2017. Esta solicitud se fundamenta en lo establecido en los artículos 228 y 277 del Código General del Proceso, que disponen la comparecencia del perito en la correspondiente audiencia de práctica de pruebas, así como la posibilidad de solicitar el traslado de informes para aclaración o complementación. La presencia del supervisor es necesaria para que ambas partes ejerzan el derecho de contradicción que les asiste dentro del proceso judicial.

5. PRUEBAS DE OFICIO:

Solicito respetuosamente a su despacho, oficiar al Ministerio del Interior para que aporte a este despacho el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, toda vez que este fue solicitado por medio de petición, si que aún haya sido remitido.

CAPÍTULO VIII: ANEXOS

1. Pruebas relacionadas en el acápite de pruebas.
2. Certificado de existencia y representación legal de **ASEGURADOORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.** expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPITULO IX: NOTIFICACIONES

La parte actora en el lugar indicado en la demanda.

Al suscrito y a mí representada en la Calle 69 N°4-48, Oficina 502 de la ciudad de Bogotá o en la dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Del Señor Juez, respetuosamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.